



**RESOLUCIÓN No. SSPD - 20144010025335 DEL 16/07/2014**  
**POR LA CUAL SE RESUELVE UN RECURSO DE REPOSICIÓN**

**EL SUPERINTENDENTE DELEGADO PARA ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO,**

en ejercicio de las atribuciones conferidas en el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007 y en el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012 y

**CONSIDERANDO:**

**I. ANTECEDENTES**

Que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios SSPD, de conformidad con lo previsto en el Parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, mediante la cual "se desarrollan los artículos 356 y 357 de la Constitución Política y se dictan otras disposiciones", es la entidad competente para adelantar el proceso de certificación relacionado con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones o de retirarla, según sea el caso, a los distritos y municipios para asegurar la prestación eficiente de los servicios públicos de agua potable y saneamiento básico.

Que el artículo 8° del Decreto 1040 de 2012, por medio del cual se reglamentó la Ley 1176 de 2007, estableció que "La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios adelantará el proceso de certificación de acuerdo con lo establecido en el artículo 4 de la Ley 1176 de 2007. Para estos efectos, verificará que los municipios y distritos hayan dado cumplimiento a los requisitos que se establecen en el artículo 9 del presente decreto y 10 para el caso de los prestadores directos de alguno de los servicios de acueducto, alcantarillado y/o aseo, en el año calendario inmediatamente anterior."

Que la Superintendente de Servicios Públicos, mediante Resolución No. SSPD 20111300032265, del 21 de octubre de 2011 delegó en el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, entre otras funciones, la de expedir los actos administrativos mediante los cuales se decida sobre la certificación de municipios relacionada con la administración de los recursos del SGP-APSB a que se refiere el parágrafo del artículo 4° de la Ley 1176 de 2007, en concordancia con los decretos 1040 de 2012 y 1639 de 2013; resolver los recursos que contra ellos se presenten y en general la de ejercer todas las actuaciones previstas en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo C.P.A.C.A., para adelantar los procedimientos administrativos.

Que el municipio de GÜEPSA, departamento de SANTANDER, es de categoría 6, y fue prestador directo del servicio de aseo a 31 de diciembre de 2012, y para obtener la certificación relacionada con la administración de los recursos del Sistema General de Participaciones para agua potable y saneamiento básico, debía acreditar el cumplimiento de los requisitos previstos en los artículos 3° y 5° del Decreto 1639 de 2013.

**II. DE LA RESOLUCIÓN DE DESCERTIFICACIÓN**

Que mediante Resolución No. SSPD 20144010010605 del 07 de abril de 2014, la SSPD decidió **DESCERTIFICAR** al municipio de GÜEPSA departamento de SANTANDER por no haber cumplido el siguiente criterio previsto en el artículo 5° del Decreto 1639 de 2013.

---

**Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición**

---

a) Reporte al SUI del formato Acto de Aprobación de Tarifas, expedido antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia, según los servicios prestados, de conformidad con la normatividad expedida por la SSPD relacionada con el cargue de información al sistema.

**2.1 Notificación de la Resolución No. SSPD 20144010010605 del 07 de abril de 2014.**

Para efectos de notificar la Resolución No. SSPD 20144010010605, del 07 de abril de 2014 se envió citación al señor alcalde del municipio de GÜEPSA, del departamento de SANTANDER, mediante el oficio No. SSPD 20144010192521 del 07 de abril de 2014 enviado por correo certificado el día 11 de abril de 2014, advirtiéndole que en caso de no comparecer personalmente, se notificará la decisión mediante aviso conforme lo dispone el artículo 69 de la Ley 1437 de 2011.

Atendiendo la anterior citación, compareció ante esta entidad el día 24 de abril de 2014, el señor Osmar Ángel Arias Acuña, alcalde municipal de GÜEPSA, del departamento de SANTANDER, quien se notificó en forma personal del citado acto administrativo.

Ahora bien, el señor OSMAR ÁNGEL ARIAS ACUÑA, en su calidad de alcalde del municipio de GÜEPSA del departamento de SANTANDER, mediante documentos radicados en esta entidad bajo los números SSPD 20145290234002 del 08 de mayo de 2014 y 20145290257362 del 19 de mayo de 2014, presentó recurso de reposición contra la Resolución No. SSPD 20144010010605 del 07 de abril de 2014.

**III. DEL RECURSO DE REPOSICIÓN****3.1 Verificación de los requisitos de forma**

El artículo 77 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, establece que, para efectos de ser admitidos y resueltos, los recursos de reposición deben interponerse dentro del plazo legal, por el interesado o su representante o apoderado debidamente constituido, sustentarse con expresión concreta de los motivos de inconformidad e indicar el nombre y la dirección del recurrente.

De conformidad con lo anterior, revisado el escrito de reposición se observa que este fue presentado por el alcalde del municipio de GÜEPSA, del departamento de SANTANDER, quien de conformidad con el artículo 314 de la C.P. es considerado el representante legal y por lo tanto era el funcionario competente para interponerlo, además se confirma que fue presentado dentro del término legal, que en él se sustentan de forma concreta los motivos de inconformidad y se indicó la dirección para efectos de recibir notificaciones.

Según lo expuesto, los escritos radicados con los Nos. SSPD 20145290234002 del 08 de mayo de 2014 y 20145290257362 del 19 de mayo de 2014, reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 77 del C.P.A.C.A, por lo tanto se procederá a efectuar el análisis de fondo del recurso.

**3.2 Argumentos del recurrente**

Como argumentos del recurso, se alegaron los siguientes por parte del alcalde municipal:

***"VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO POR INCONGRUENCIA ENTRE LOS CARGOS FORMULADOS DURANTE PROCESO Y EL CARGO POR EL QUE FUE DESCERTIFICADO***

*El debido proceso administrativo está consagrado en el artículo (sic) 29 constitucional, "el debido proceso se aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y administrativas", es decir que ninguna autoridad administrativa puede sustraerse de él, la corte constitucional en sentencia T-391 de 1999, se señaló lo siguiente;*

*"El debido proceso en los asuntos administrativos implica que el Estado se sujete a las reglas definidas en el ordenamiento jurídico, no solamente en las actuaciones que se adelantan contra los particulares para deducir responsabilidades de carácter disciplinario o aquellas relativas al control y vigilancia de su actividad, sino en los trámites que ellos inician para ejercer un derecho ante la administración o con el objeto de cumplir una obligación".*

*En el presente proceso se le vulnera (sic) el debido proceso administrativo al municipio de Güepsa Santander, teniendo en cuenta que en el acto de apertura de la investigación de fecha 2003-09-20 se establece lo siguiente:*

---

**Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición**

---

(...)

*Como se puede establecer la superintendencia no fue clara al formular los hechos que fundamentan los cargos por medio del cual el municipio habría incumplido los requisitos necesarios para lograr la certificación.*

*El municipio infringió (teniendo en cuenta el acto de pruebas) que los hechos por los cuales se abrió la investigación fue determinar si el cargue del acto de aprobación de la tarifa de aseo para el periodo 1A 2012, se realizó dentro del plazo establecido.*

*En ninguna parte del proceso la superintendencia comunico (sic) al municipio sobre el segundo hecho por el cual se le estaba investigado, esto es, que el acto de aprobación de la tarifa de aseo para el periodo 1A 2012 estaba por fuera de la fecha máxima para expedirlo de acuerdo a la interpretación hecha por la superintendencia.*

*En este sentido no hay congruencia entre los hechos debatidos durante el proceso administrativo y el hecho por el cual fue descertificado el municipio de Güepsa-Santander, esto es como si a un imputado se le dijera que se le está investigado por lesiones personales y se le condenara por tentativa de homicidio, tienen circunstancias parecidas pero nunca son iguales.*

*La superintendencia también omitió las reglas establecidas en la ley 1437 de 2011, artículo (sic) 47 que establece las reglas del proceso administrativo sancionatorio;*

*Artículo 47, Procedimiento administrativo sancionatorio. Los procedimientos administrativos de carácter sancionatorio no regulados por leyes especiales o por el Código Disciplinario Único se sujetarán a las disposiciones de esta Parte Primera del Código. Los preceptos de este Código se aplicarán también en lo no previsto por dichas leyes.*

*Las actuaciones administrativas de naturaleza sancionatoria podrán iniciarse de oficio o por solicitud de cualquier persona. Cuando como resultado de averiguaciones preliminares, la autoridad establezca que existen méritos para adelantar un procedimiento sancionatorio, así lo comunicará al interesado. Concluidas las averiguaciones preliminares, si fuere del caso, formulará cargos mediante acto administrativo en el que señalará, con precisión y claridad, los hechos que lo originan, las personas naturales o jurídicas objeto de la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes. Este acto administrativo deberá ser notificado personalmente a los investigados. Contra esta decisión no procede recurso.*

*Los investigados podrán, dentro de los quince (15) días siguientes a la notificación de la formulación de cargos, presentar los descargos y solicitar o aportar las pruebas que pretendan hacer valer. Serán rechazadas de manera motivada, las inconducentes, las imperitinentes y las superfluas y no se atenderán las practicadas ilegalmente. (Negrilla fuera del texto).*

*Es claro que la superintendencia omitió realizar el acto administrativo consistente en la formulación de los cargos, nunca le comunicó al municipio los hechos que originan la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes, la entidad abuso de su posición dominante al abrir una investigación y condenar sin que el municipio supiera por qué era investigado.*

*Así las cosas al municipio de Güepsa no se le dio la oportunidad de defenderse sobre este segundo cargo, que constituye a esta alturas del proceso un nuevo cargo o un nuevo hecho del que el municipio por obvias razones no pudo ejercer el derecho de contradicción, aspecto que sin duda es una flagrante violación del debido proceso administrativo.*

**VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO ADMINISTRATIVO POR NO TENER EN CUENTA LAS PRUEBAS QUE SE ALLEGARON AL PROCESO**

*En el proceso que finalizo (sic) con el acto administrativo que se recurre, y en el que se señala como el segundo cargo que sustenta la decisión de descertificar el municipio, consistente en que el municipio no cargo el acto de aprobación de la tarifa de aseo para el periodo 1A 2012 en tiempo, esto es el 30 de agosto de 2013, el municipio le informo a la superintendencia en acto de fecha 06 de noviembre de 2013 lo siguiente:*

---

**Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición**

---

*El día 30 de agosto de 2013 se solicitó por correo electrónico a [superservicios@GOV.CO](mailto:superservicios@GOV.CO), la reversión del aplicativo ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS ASEO PDF para el periodo 1 A 2012, a fin de poder realizar el cargue al SUI de la resolución No. 206 de agosto de 2013 por la cual se define la tarifa del servicio de aseo, para cumplir con los criterios del proceso de certificación establecido del decreto 1639 de 31 de julio de 2013.*

*La superintendencia de servicios públicos domiciliarios autorizó hasta el día 23 de septiembre de 2013 con el radicado 20131800623091 del 23/09/2013 el cargue al SUI comunicación recibida el 02 de octubre de 2013 en la alcaldía de Güepsa, en la que además claramente se detalla que la solicitud de autorización para cargue al SUI fue enviada el 30 de agosto de 2013.*

*Por consiguiente solo fue posible reportar en el SUI el aplicativo ACTO DE APROBACION (sic) DE TARIFAS ASEO PDF para el periodo 1 A 2012, el 02/10/2013 con la resolución No. 206 de 2013 por la cual se define la tarifa del servicio de aseo.*

*Esta información fue verificada en el proceso por comunicación enviada por el jefe de la oficina de informática (E); coordinador del grupo SUI tal como lo establece el acto que se recurre, sin embargo la superintendencia no hace ningún análisis de estos hechos, solo se limitó a señalarlos.*

*Las circunstancias descritas en el oficio expedido por el Municipio y adjuntado al proceso llevan necesariamente a establecer que la información no se cambió (sic) a tiempo, y esto es una culpa imputada a la superintendencia y no al Municipio.*

*El acto administrativo de descertificación tiene varias falencias importantes, i) no se hace un análisis de responsabilidad sobre el cargo formulado, II) no se estudia el hecho de que la autorización de la superintendencia para el cargue de la información no fue inmediata, y III) no se dice por qué este hecho no es una causal exonerativa para la descertificación del municipio.*

*Por consiguiente no hay congruencia entre las pruebas aportadas al proceso y la decisión en la que se descertifica al municipio, hechos que sin duda constituyen una violación flagrante al debido proceso administrativo.*

*La corte constitucional en la sentencia T-270 de 2004, que protegió a los usuarios de servicios públicos señaló (sic) lo siguiente.*

*En consecuencia, las sanciones impuestas de plano, por ser contrarias al debido proceso (art. 29 CP.), están proscritas en el ordenamiento constitucional.*

*Nótese que la sanción es impuesta de plano no sólo cuando al interior de la actuación administrativa no existe ninguna posibilidad de defensa y contradicción para el administrado, sino incluso en los eventos que existiendo su ejercicio es meramente formal ya que a pesar de que se utilice esa oportunidad de defensa ella no tiene ningún efecto en la decisión definitiva que se adopte en cada caso.*

*En otras palabras, presentados o no los descargos, la decisión sancionatoria en todo caso se profiere, puesto que la intervención del afectado no tiene el grado de efectividad que exige el derecho de defensa en las actuaciones administrativas, las cuales deben brindar un abanico de posibilidad de defensa al administrado en aras de no colocarlo en estado de indefensión, (Negrilla fuera del texto).*

*Lo anterior sirve para sustentar que la decisión tomada por la superintendencia es efectivamente de plano, pues no solo, no se otorgaron todas las oportunidades procesales sino que tampoco se hizo un análisis de fondo de las circunstancias que rodearon el caso de la certificación del municipio de Güepsa -Santander.*

#### **HECHO IMPUTABLE A LA SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS**

*Seguimos sustentando que el sistema en el cual se hace el cargue de la información (SUI) no permitió hacerlo en la fecha establecida, este municipio tuvo que esperar la autorización de los encargados por el SUI para hacerlo, hecho que fue probado en el proceso por*

**Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición**

---

comunicación enviada por el jefe de la oficina de informática (E). coordinador del grupo SUI.

Si el sistema y el procedimiento con que cuenta la superintendencia, hubiese permitido que el 30 de agosto de 2013 se cambiara la información inmediatamente se habría cargado, aspecto que sin duda no es de nuestra responsabilidad, por consiguiente no es admisible que se nos sancione por un hecho cuya clara responsabilidad es de la superintendencia y no del Municipio de Güepsa.

Se pudo determinar en el proceso que el municipio cargo (sic) dentro del plazo señalado por la superintendencia la información requerida, esto es, en el acto de autorización de fecha 23 de septiembre de 2013 con el radicado 20131800623091 del 23/09/2013.

Debe señalarse, de acuerdo a lo expresado por esa superintendencia, que: (...) De lo cual debe decirse, que la descertificación de la cual está siendo objeto el municipio de Güepsa - Santander, es una situación ilegal y nula, ya que:

- Es muy diferente no reportar información, que solicitar reversión o modificación de la información reportada con anterioridad, pues como esa misma Superintendencia lo reconoce; "el ente territorial solicitó el 30 de agosto de 2013 a esta superintendencia - Grupo SUI"; de lo cual debe señalarse que la información previo al 30 de agosto de 2013 ya se había reportado al SUI, la solicitud presentada por el Municipio de Güepsa - Santander, consistía en el cambio del inicialmente presentado; por todo lo anterior no es lo mismo el no reporte de información que el trámite de modificación de la inicialmente presentada, situación administrativa invalorada por esa Superintendencia.

La solicitud de reversión del "formato ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS DE ASEO PDF", para la vigencia anual 2012 fue autorizada por esta superintendencia mediante oficio SSPD - 20131800623091 del 23 de septiembre de 2013, en el cual se indicó que "para efectuar el retiro de la información que se tenía (sic) cargada y el reporte de la información nueva, dispone de un término de siete días hábiles, una vez la Oficina informática haya ejecutado la información"; de lo cual debe decirse que esa superintendencia autorizó (sic):

El cambio del formato ACTO DE APROBACION DE TARIFAS DE ASEO PDF", para la vigencia anual 2012; siendo esta autorización diferente a cargar extemporáneamente información dicho en otras palabras, lo que realizó el municipio de Güepsa - Santander, fue sustituir la información inicialmente presentada, situación que en si misma no puede ser tenida como extemporánea, porque no hubo tal comportamiento, por parte de este ente territorial.

La comunicación de la aprobación de la reversión del formato ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS DE ASEO PDF", para la vigencia anual 2012, fue entregada al municipio de Güepsa el 02 de octubre de 2013, siendo reportado por este ente territorial dicha información el mismo día; de lo cual debe decirse que de todo lo descrito, ninguno de los plazos o normas se encuentran infringidas pues la información fue reportada oportunamente, lo que hizo el municipio fue solicitar reversión de la inicialmente presentada, situación que fue aceptada por esta superintendencia por oficio SSPD - 20131800623091 del 23 de septiembre de 2013; de lo cual es necesario señalar que no es lógico que esa superintendencia autoriza la reversión del formato ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS DE ASEO PDF", para la vigencia anual 2012, y posteriormente sanciona a título de descertificación, cuando ella misma es quien autoriza y prolonga sus plazos.

**EL ACTO DE APROBACIÓN DE LA TARIFA DE ASEO PARA EL PERIODO 1A 2012 NO ESTÁ POR FUERA DE LA FECHA MÁXIMA EN EL QUE DEBÍA SER EXPEDIDO.**

Respecto del hecho que el municipio realizó el acto de aprobación de la tarifa de aseo para el periodo 1A 2012 por fuera del tiempo de la fecha máxima en que debía ser expedido, señalamos que esto es una interpretación errada por lo siguiente.

El decreto 1639 de 2013 señala en el artículo 5 lo siguiente.

---

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

---

*En concordancia con lo anteriormente planteado encontramos lo dispuesto en el artículo 7 que reza;*

*Artículo 7º, Plazos Para la certificación relacionada con los requisitos y criterios establecidos para el aspecto "Destinación y giro de los recursos de la participación para agua potable y saneamiento básico con el propósito de financiar actividades elegibles, los municipios y distritos deberán reportar al FUT la información a más tardar el 15 de marzo de cada vigencia, o en la fecha en que determine la Contaduría General de la Nación de conformidad con el Decreto 3402 de 2007, o (a norma que la modifique, adicione o sustituya).*

**La información de los demás criterios para la certificación de la vigencia 2012 deberá reportarse en el SUI a más tardar el 30 de agosto de 2013.**

*De la expresión "expedido antes de la fecha máxima de cargue" y "La información de los demás criterios para la certificación de en vigencia 2012, deberá reportarse en el SUI a más tardar el 30 de agosto de 2013" se entiende que el acto debía ser expedido antes que culminara el día 30 de agosto, es decir, antes de las 11 y 59 pm del día 30 de agosto de 2013, como efectivamente se hizo.*

*Una interpretación contraria a la planteada anteriormente conlleva a un caos en el procedimiento, dado que concluir que la fecha máxima para expedir el acto de aprobación de tarifas no era el 30 de agosto de 2013 a las 11 y 59 pm, es como afirmar que todo procedimiento para la certificación hecho después de la 12 am del 30 de agosto es inválido, (sic) ello no es así, pues el día aun (sic) no se había acabado, apenas estaba comenzando. Por lo anterior no es correcta la interpretación de la superintendencia al señalar que esta fecha máxima para expedir el acto era el 29 de agosto de 2013.*

*Por otro lado no tiene ningún sentido una interpretación de este tipo, pues si el acto se expide el 29 o el 30 de agosto, esta fecha no tiene un impacto en la prestación del servicio, sin embargo una interpretación de esta índole para justificar el acto administrativo que se recurre si la interpretación de la superintendencia desde luego causa un gran perjuicio al municipio de Güepsa, y a sus pobladores, castigando de esta manera a una administración que ha cumplido cabalmente con sus deberes constitucionales de proteger y garantizar a los ciudadanos el derecho a los servicios públicos domiciliarios, con calidad y eficiencia.*

*En este orden de ideas solicitamos se tenga en cuenta nuestra interpretación acogiéndonos al principio de la buena fe en nuestras actuaciones".*

### 3.3. De las pruebas relacionadas en el recurso.

Con los documentos radicados Nos. SSPD 20145290234002 del 08 de mayo de 2014 y 20145290257362 del 19 de mayo de 2014, el ente municipal recurrente no aportó pruebas.

## IV. ANÁLISIS DE FONDO

Para determinar si le asiste razón a la parte recurrente, esta superintendencia procederá a analizar los argumentos expuestos en el escrito de reposición, lo cual efectuará de la siguiente manera:

**4.1. Argumentos expuestos sobre el cumplimiento del requisito: Reporte al SUI del formato Acto de Aprobación de Tarifas, expedido antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia, según los servicios prestados, de conformidad con la normatividad expedida por la SSPD relacionada con el cargue de información al sistema.**

#### 4.1.1. Frente a la Violación al debido proceso

Manifiesta el recurrente que existió violación al debido proceso administrativo por incongruencia entre los cargos formulados durante proceso y el cargo por el que fue descertificado, toda vez que afirma que el ente municipal infringió que los hechos por los cuales se decretaron pruebas en esta actuación administrativa, era para determinar si el cargue al SUI del acto de aprobación de la tarifa de aseo, se había realizado dentro del plazo establecido en el Decreto 1639 de 2013; pero que en su concepto, durante el proceso de certificación esta SSPD no le comunicó al municipio "sobre el segundo hecho por el cual se le estaba

---

**Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición**

---

*investigado, esto es, que el acto de aprobación de la tarifa de aseo para el periodo 1A 2012 estaba por fuera de la fecha máxima para expedirlo de acuerdo a la interpretación hecha por la superintendencia".*

Por lo anterior, considera el impugnante que no hay congruencia entre los hechos debatidos durante el proceso administrativo y el hecho por el cual fue descertificado el municipio de Güepsa-Santander.

Agrega a lo anterior, que en su sentir, esta entidad omitió las reglas establecidas en la Ley 1437 de 2011, referidas a las reglas del proceso administrativo sancionatorio, porque omitió realizar el acto administrativo consistente en la formulación de los cargos, no le comunicó al municipio los hechos que originaron la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes, de ahí que afirme que *"la entidad abuso de su posición dominante al abrir una investigación y condenar sin que el municipio supiera por qué era investigado"*.

Adiciona el impugnante que en este proceso de certificación, la superintendencia violó el debido proceso, toda vez que no observó las formalidades establecidas en el artículo 47 y siguientes de la Ley 1437 de 2011, ya que en su concepto, no se profirió pliego de cargos, para que el ente territorial ejerciera su derecho de defensa y contradicción, no le comunicó al municipio los hechos que originaron la investigación, las disposiciones presuntamente vulneradas y las sanciones o medidas que serían procedentes, de ahí que afirme que *"la entidad abuso de su posición dominante al abrir una investigación y condenar sin que el municipio supiera por qué era investigado"*.

De cara a tales argumentos, esta entidad inicia señalando que el artículo 29 de la Constitución Política, consagra el derecho al debido proceso en toda clase de actuaciones judiciales y administrativas; ahora bien, esta garantía procesal reconocida a la persona (natural o jurídica, pública o privada), tiene como finalidad que no pueda resultar sancionada o perjudicada por decisiones de la autoridad que desconozcan las oportunidades establecidas por la ley para intervenir y defenderse.

Ahora bien, teniendo como pilar de las actuaciones administrativas, como la que nos ocupa, el respeto por el debido proceso, haremos referencia a lo que se ha denominado debido proceso administrativo; al respecto, la Honorable Corte Constitucional al pronunciarse frente a este tema, señaló: *"Así, a partir de una concepción del procedimiento administrativo que lo entiende como un conjunto de actos independientes pero concatenados con miras a la obtención de un resultado final que es la decisión administrativa definitiva, cada acto, ya sea el que desencadena la actuación, los instrumentales o intermedios, el que le pone fin, el que comunica este último y los destinados a resolver los recursos procedentes por la vía gubernativa, deben responder al principio del debido proceso. Pero como mediante el procedimiento administrativo se logra el cumplimiento de la función administrativa, el mismo, adicionalmente a las garantías estrictamente procesales que debe contemplar, debe estar presidido por los principios constitucionales que gobiernan la función pública y que enuncia el canon 209 superior. Estos principios son los de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad"*.

Así mismo, el máximo Tribunal Constitucional de nuestro país, en sentencia T-2.897.231 de 2011, señaló que son garantías del debido proceso administrativo, entre otras, las siguientes: (a) el derecho a conocer el inicio de la actuación, (b) a ser oído durante todo el trámite, (c) a ser notificado en debida forma, (d) a que se adelante por autoridad competente y con pleno respeto de las formas propias de cada juicio, (e) a que no se presenten dilaciones injustificadas, (f) a gozar de la presunción de inocencia, (g) a ejercer los derechos de defensa y contradicción, (h) a presentar pruebas y a controvertir aquellas que aporte la parte contraria, (i) a que se resuelva en forma motivada la situación planteada, (j) a impugnar la decisión que se adopte y a promover la nulidad de los actos que se expidan con vulneración del debido proceso.

Con fundamento en lo señalado y revisado el procedimiento llevado a cabo por esta superintendencia, el cual terminó con la descertificación del municipio de Güepsa, se estableció que el proceso adelantado en el marco de la certificación para la administración de los recursos del SGP-APSB, para la vigencia 2012, cumplió a cabalidad con los presupuestos exigidos por la norma constitucional y jurisprudencia, acerca de las garantías que aseguran el debido proceso, a saber:

Esta entidad con oficio SSPD 20134010148971, del 27 de marzo de 2013, le informó al alcalde de Güepsa, las obligaciones a cargo de la administración municipal frente al cargue de información al SUI para los procesos de certificación en coberturas mínimas y SGP – APSB (vigencia 2012), además de hacerle referencia a los requerimientos realizados por la Procuraduría General de la Nación en las Directivas 015 de 2005 y 05 de 2008. Es decir, al ente territorial se le comunicó oportunamente del procedimiento y requisitos para obtener la certificación en mención.

---

<sup>1</sup> Corte Constitucional. Sentencia C-610 del 1 de agosto 2012. MP Luis Ernesto Vargas Silva

**Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición**

Así mismo, el auto de apertura del proceso SGP-APSB, vigencia 2012, número SSPD 20134010016356, del 20 de septiembre de 2013, fue comunicado al municipio con oficio SSPD 20134010617471 del 20 de septiembre de 2013, y remitido por correo certificado el 26 de septiembre de 2013.

De otra parte, esta entidad le brindó la oportunidad al municipio de ser oído antes de tomar la decisión, ya que se decretó la práctica de las pruebas a través del auto No. SSPD 20134010020386 del 15 de octubre de 2013, el que le fue comunicado al municipio mediante radicado SSPD 20134010690691 del 21 de octubre de 2013.

El anterior procedimiento se efectuó, en aras de salvaguardar el debido proceso del municipio de Güepsa, atendiendo que esta SSPD estableció al revisar la información que cargó en el SUI, había cargado el acto de aprobación de tarifas el 02 de octubre de 2013, y como el plazo máximo de cargue era hasta el 30 de agosto de 2013, y el municipio había solicitado una reversión ese mismo día, esta entidad debía verificar si el reporte del acto referido se había hecho dentro del plazo efectuado por la dependencia encargada de autorizar la reversión.

Fue así como esta superintendencia en el auto probatorio SSPD 20134010020386, justificó la prueba ordenada al Grupo SUI de esta entidad en los siguientes términos:

Que para llevar el trámite de la certificación del municipio de GÜEPSA - SANTANDER, se hace necesario determinar que la información reportada por el ente territorial antes del 30 de agosto de 2013, corresponde a la solicitada para la acreditación del criterio consagrado en el artículo 5 del Decreto 1639 de 2013, consistente en "i) Reporte al SUI del formato Acto de Aprobación de Tarifas, expedido antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia, según los servicios prestados, de conformidad con la normatividad expedida por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios relacionada con el cargue de información al sistema." Lo anterior debido a que el municipio de GÜEPSA reportó, sólo hasta el día 02 de octubre de 2013, en el formato "ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS DE LOS SERVICIOS DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO, 2012", del Sistema Único de Información SUI, la Resolución No. 206 del 30 de agosto de 2013, por medio del cual se establecen las tarifas de Aseo para el municipio. Ahora bien, mediante radicado SSPD 20135290451022 del 02 de septiembre de 2013 se evidencia que el municipio mediante correo electrónico del 30 de agosto de 2013, solicitó a la oficina de informática de esta Entidad "Reversión del aplicativo ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS DE ASEO PDF para el período 1A 2012", solicitud que fue tramitada por el Grupo SUI con radicado SSPD 20131800823091 del 23 de septiembre de 2013, por medio de la cual se informó al municipio que "para ejecutar el retiro de la información que tenía cargada y el reporte de la información nueva, dispone de un término de siete días hábiles, una vez la Oficina de Informática haya ejecutado la aprobación". Así las cosas, en aras de establecer i) a partir de qué fecha la Oficina de Informática de esta Entidad ejecutó la aprobación del cargue; y ii) hasta qué fecha contaba como plazo el municipio para cargar la información, se hace necesario la práctica de pruebas.

Es decir, la necesidad, pertinencia y conducencia de la prueba tuvo como fundamento establecer si el cargue de información que había efectuado el municipio al SUI en el formato "Acto de Aprobación de Tarifas", el día 02 de octubre de 2013, pese a ser objetivamente extemporáneo de acuerdo con el plazo máximo fijado por el Decreto 1639 de 2013 (30 de agosto de 2013), estaba dentro del término fijado por la Oficina de Informática de esta entidad, atendiendo la solicitud de reversión que el ente municipal había pedido al Grupo SUI; ya que de haberse cargado el documento por fuera del plazo fijado por ese Grupo, de plano se habría señalado que el cargue era extemporáneo, y el acto administrativo reportado el 02 de octubre 2013 no se hubiera revisado.

Ahora, se reitera, como la reversión pedida por el ente municipal fue autorizada por el Grupo SUI, y el ente territorial cargó el acto aprobación de tarifas dentro del término señalado por el citado Grupo, este Despacho consideró que el cargue se había realizado dentro del plazo fijado por el Grupo SUI, y por consiguiente, entró a verificar que el acto cumpliera con las condiciones exigidas por el Decreto 1639 de 2013. Así las cosas, no es válida la afirmación del impugnante relacionada con la no congruencia "entre las pruebas aportadas al proceso y la decisión en la que se descertifica al municipio, hechos que sin duda constituyen una violación flagrante al debido proceso administrativo", porque la prueba se ordenó para revisar la fecha de cargue y la decisión de descertificar del ente municipal tuvo como sustento que el acto reportado no se ajustó a las previsiones establecidas en el artículo 5º, ibídem.

Nótese que en la Resolución de descertificación esta entidad indicó: "Atendiendo lo anterior y revisado el SUI, se verificó que el municipio de GÜEPSA reportó el 02 de octubre de 2013, dentro del plazo otorgado por el Grupo SUI de esta superintendencia, en el formato "ACTO DE APROBACIÓN DE TARIFAS DE ASEO PDF", la Resolución No. 206 de 2013, "Por la cual se define la tarifa del servicio de aseo", acto suscrito por el alcalde municipal, el cual tiene fecha de expedición 30 de agosto de 2013". (La subraya y negrilla fuera del texto).

Por consiguiente, esta entidad le aclara y reitera al ente municipal que el acto de aprobación de tarifas que cargó en el SUI el 02 de octubre de 2013, se tuvo como cargado en tiempo y no extemporáneamente como parece interpretarlo el recurrente, por ende, no son de recibo sus argumentos cuando señala que

---

**Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición**

---

existe responsabilidad de esta SSPD frente al cargue del documento en fecha posterior al 30 de agosto de 2013, porque este reporte fue validado por esta entidad.

Ahora, frente a los señalamientos que realiza el municipio de no haberse señalado su responsabilidad sobre el cargo formulado, esta entidad le manifiesta que este procedimiento no es sancionatorio y no se formulan cargos, como se explicará en el acápite siguiente; respecto de no haber estudiado el hecho de que la autorización de la superintendencia para el cargue de la información no fue inmediata, esta entidad le reitera al municipio que esta situación se valoró en el acto atacado, tan es así que con la prueba decretada y la información allegada en virtud de la misma, el reporte del acto de aprobación de tarifas se tuvo por realizado oportunamente; y de cara a la afirmación de no haberle dicho esta SSPD por qué *"este hecho no es una causal exonerativa para la descertificación del municipio"*, este ente de control le reitera al ente municipal que la decisión de descertificarlo se sustentó porque el acto de aprobación de tarifas no cumplía con las exigencias señaladas en el Decreto 1639 de 2013, y no por haberse cargado el documento en el SU1 por fuera del plazo fijado en el Decreto 1639 de 2013, porque se repite, se tuvo cargado en tiempo.

Ahora bien, una vez expedida la Resolución de descertificación No. SSPD 20144010010605, del 07 de abril de 2014, este acto administrativo fue debidamente motivado y notificado a la parte interesada de conformidad con los presupuestos de Ley, para lo cual se le brindó al ente territorial la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción y por consiguiente, de impugnar la decisión, al advertirle que contra la decisión adoptada procedía el recurso de reposición, recurso que aquí se decide.

Así pues, resulta claro que la Resolución de descertificación, no es un acto violatorio del debido proceso, y por el contrario, constituye una muestra evidente de su desarrollo y de la aplicación de los principios de economía, celeridad, eficacia, imparcialidad, publicidad y contradicción que rigen las actuaciones administrativas.

#### **4.2. Frente a los argumentos del recurrente de ser el proceso de certificación un proceso sancionatorio.**

De cara a las aseveraciones del recurrente que el procedimiento que se surte para la certificación en el SGP-APSB, es un procedimiento sancionatorio, esta SSPD reitera que, como quedó señalado en el numeral anterior, el proceso de certificación es una actuación administrativa que tiene como fundamento el debido proceso administrativo.

Ahora bien, es preciso señalar que el proceso de certificación es una actuación que se adelanta en estricto cumplimiento de las disposiciones legales teniendo a cada municipio de manera independiente y para cada ente territorial se analizó el cumplimiento de requisitos para efectos de obtener la certificación de la vigencia 2012.

Dicho proceso no se entiende como una actuación sancionatoria, por ello, las normas procesales que se deben aplicar al presente proceso de conformidad con el artículo 8º del Decreto 1639 de 2013, son las consagradas en el procedimiento administrativo general y no en el sancionatorio como en forma equivocada se pretende hacer ver.

La Ley 142 de 1994, por la cual se establece el régimen de los servicios públicos domiciliarios y se dictan otras disposiciones, confiere a las autoridades del sector de servicios públicos la facultad de producir, unilateralmente, actos administrativos particulares y generales; por eso consagra reglas especiales sobre procedimientos administrativos, las cuales están previstas en los artículos 106, 115 y se relacionan con los actos de carácter particular y concreto que las autoridades pueden producir, como lo son las sanciones.

El artículo 79 de la Ley 142 de 1994, establece que la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios tiene las funciones de vigilancia, control y sanción de las empresas de servicios públicos domiciliarios; a su vez, el artículo 81 de la misma le consagra las sanciones que puede imponer la SSPD a los prestadores de servicios públicos domiciliarios.

Así las cosas, y debido a que la descertificación de los municipios no se encuentra señalada como una sanción de las que pueda imponer esta superintendencia en virtud del ejercicio de la facultad sancionatoria, se aplican las normas del proceso administrativo general y no las del proceso administrativo sancionatorio, se reitera.

Como corolario de lo expuesto, no son de recibo para esta entidad las afirmaciones realizadas por el impugnante en el sentido que esta entidad no le formuló cargos, ni le dio la oportunidad de rendir

---

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

---

descargos, por cuanto al haberse regido el proceso de certificación SPG-APBSB, vigencia 2012, por el proceso administrativo y no sancionatorio, tales etapas no se tenían que surtir dentro de esta actuación.

**4.3. Argumentos del municipio en los que afirma que el acto de aprobación de la tarifa de aseo para el periodo 1a 2012 no está por fuera de la fecha máxima en el que debía ser expedido.**

Considera el ente territorial que el acto de aprobación de la tarifa de aseo para el periodo 1A 2012, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 5º y 7º del Decreto 1639 de 2013, fue expedido en término, aduciendo para tal fin que *"la expresión 'expedido antes de la fecha máxima de cargue' y 'La información de los demás criterios para la certificación de en vigencia 2012, deberá reportarse en el SUI a más tardar el 30 de agosto de 2013' se entiende que el acto debía ser expedido antes que culminara el día 30 de agosto, es decir, antes de las 11 y 59 pm del día 30 de agosto de 2013, como efectivamente se hizo"*.

Afirma que una interpretación contraria a la planteada *"conlleva a un caos en el procedimiento, dado que concluir que la fecha máxima para expedir el acto de aprobación de tarifas no era el 30 de agosto de 2013 a las 11 y 59 pm, es como afirmar que todo procedimiento para la certificación hecho después de la 12 am del 30 de agosto es inválido, (sic) ello no es así, pues el día aun (sic) no se había acabado, apenas estaba comenzando. Por lo anterior no es correcta la interpretación de la superintendencia al señalar que esta fecha máxima para expedir el acto era el 29 de agosto de 2013"*.

De cara a los anteriores argumentos, este despacho analizará hasta qué fecha tenían los municipios y distritos del país para expedir el acto de aprobación de tarifas.

El Decreto 1639 de 2013 en el inciso 2º del artículo 7º, dispone:

*"Artículo 7. Plazos. (...) La información de los demás criterios para la certificación de la vigencia 2012, deberá reportarse al SUI a más tardar el 30 de agosto de 2013".*

Sin embargo, el artículo 5º de la misma codificación señala, frente al criterio de "Acto aprobación de tarifas":

*"j) Reporte al SUI del formato Acto de Aprobación de Tarifas, expedido antes de la fecha máxima de cargue para la certificación de la respectiva vigencia, según los servicios prestados, de conformidad con la normatividad expedida por la SSPD relacionada con el cargue de información al sistema".*

Revisada la anterior normatividad se establece que el Decreto 1639 de 2013, fijó el 30 de agosto de 2013, como la fecha máxima de cargue para reportar la información en el SUI, dentro del proceso de certificación en el SGP-APSB, vigencia 2012.

Ahora, si el acto de aprobación de tarifas debía expedirse antes del 30 de agosto de 2013, resulta claro que la fecha límite para emitir ese acto era el 29 de agosto de ese año.

A esta conclusión se arriba, de acuerdo con lo reglamentado en materia de plazos en la Codificación Civil y en el Régimen Político y Municipal. Veamos:

El Código Civil en su artículo 67 dispone:

*"Artículo 67. Plazos. Todos los plazos de días, meses o años de que se haga mención en las leyes o en los decretos del Presidente de la Unión, de los Tribunales o Juzgados, se entenderá que han de ser completos y correrán, además, hasta la media noche del último día de plazo".*

En concordancia con la anterior norma, el artículo 59 de la Ley 4 de 1913, Sobre régimen político y municipal, señala:

*"Artículo 59. Todos los plazos de días, meses o años, de que se haga mención legal, se entenderá que terminan a la medianoche del último día del plazo. Por año y por mes se entienden los del calendario común, y por día el espacio de veinticuatro horas, pero en la ejecución de las penas se estará a lo que disponga la ley penal".*

---

Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición

---

Así mismo el artículo 68 del Código Civil consagra:

*Artículo 68. Aclaraciones sobre los límites del plazo. Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media noche en que termina el último día de plazo; y cuando se exige que haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan o expiren ciertos derechos, se entenderá que estos derechos no nacen o expiran sino después de la media noche en que termina el último día de dicho espacio de tiempo.*

*Si la computación se hace por horas, la expresión dentro de tantas horas, u otras semejante, designa un tiempo que se extiende hasta el último minuto de la última hora inclusive; y la expresión después de tantas horas, u otra semejante, designa un tiempo que principia en el primer minuto de la hora que sigue a la última del plazo.*

De igual forma, en concordancia con el referido artículo, la Ley 4 de 1913 en sus artículos 60 y 61 señalan:

*"Artículo 60. Cuando se dice que un acto debe ejecutarse en o dentro de cierto plazo, se entenderá que vale si se ejecuta antes de la media noche en que termina el último día del plazo. Cuando se exige que haya transcurrido un espacio de tiempo para que nazcan o expiren ciertos derechos, se entenderá que estos derechos nacen o expiran a la medianoche del día en que termine el respectivo espacio de tiempo.*

*Si la computación se hace por horas, la expresión "dentro de tantas horas", y otra semejante, designa un tiempo que se extiende hasta el último minuto de la última hora, inclusive, y la expresión "después de tantas horas", u otra semejante, designa un tiempo que principia en el primer minuto de la hora que sigue a la última del plazo.*

*Artículo 61. Cuando se dice que una cosa debe observarse desde tal día, se entiende que ha de observarse desde el momento siguiente a la medianoche del día anterior; y cuando se dice que debe observarse hasta tal día, se entiende que ha de observarse hasta la medianoche de dicho día".*

Bajo este panorama normativo, resulta evidente que los plazos pueden fijarse en horas, días, meses o años; y para cada uno de ellos el legislador determinó y diferenció la forma en que deben computarse a fin de establecer cuándo empiezan y cuándo terminan.

Así las cosas, para el caso que nos ocupa, el Decreto 1639 de 2013 fijó expresamente el día 30 de agosto de 2013, como fecha máxima de reporte de información al SUI, no obstante dicha fecha, se dispuso de forma especial que el acto de aprobación de tarifas debía expedirse por la administración municipal antes de ese día (30 de agosto); es decir, y acudiendo a lo preceptuado en las disposiciones señaladas, el plazo que estableció el Decreto 1639 de 2013 fue en días y no en horas, por lo cual y en acatamiento a lo dispuesto en la normatividad descrita, el plazo máximo fijado para dictar el acto aprobatorio de tarifas, era antes de la media noche del día 29 de agosto de 2013, como último día de plazo antes del 30 del mismo mes y año.

Por lo anterior, no puede interpretarse que el plazo para proferir dicho acto terminaba el 30 de agosto de 2013, antes de las 11 y 59 pm, como equivocadamente lo indica el recurrente en su escrito.

Así las cosas, en razón a que la Resolución No. 206 de 2013, "Por la cual se define la tarifa del servicio de aseo", se expidió el 30 de agosto de 2013 por la administración municipal, este acto no cumple con lo ordenado por el Decreto 1639 de 2013, en su artículo 5°, de haberse proferido antes de la fecha máxima de cargue.

De esta manera se demuestra que el municipio debía tener claro que el acto de aprobación de tarifas debía expedirse antes del 29 de agosto de 2013, pues bien, partiendo de que el artículo 5° del Decreto 1639 de 2013, es una norma procesal y que de acuerdo con lo establecido en el artículo 13 de la Ley 1564 de 2012, según el cual, "Las normas procesales son de orden público y, por consiguiente, de obligatorio cumplimiento, y en ningún caso podrán ser derogadas, modificadas o sustituidas por los funcionarios o particulares, salvo autorización expresa de la ley", no es posible aceptar los argumentos del recurrente, si se aceptaran sería poner en situación de desigualdad a aquellos entes territoriales que bajo las mismas circunstancias si dieron cumplimiento a las exigencias del procedimiento.

---

**Continuación de la resolución por la cual se resuelve un recurso de reposición**

---

En conclusión, se evidencia que el ente territorial no acreditó el cumplimiento del requisito que se le demanda; por lo tanto el recurso formulado por el señor OSMAR ÁNGEL ARIAS ACUÑA como alcalde municipal de Güepsa, no prospera y en consecuencia la Resolución recurrida se confirma.

Por lo expuesto,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO.- CONFIRMAR** la Resolución No. SSPD SSPD 20144010010605, del 07 de abril de 2014, proferida por el Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución.

**ARTÍCULO SEGUNDO.- NOTIFICAR** personalmente de la presente Resolución al alcalde del municipio de GÜEPSA, departamento de SANTANDER, haciéndole entrega de una copia de la misma, y advirtiéndole que contra ésta no procede recurso alguno. De no ser posible la notificación personal, se debe dar aplicación al artículo 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011).

**ARTÍCULO TERCERO.- COMUNICAR** el contenido de la presente Resolución al gobernador del departamento de SANTANDER, al Departamento Nacional de Planeación, al Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio y al Ministerio de Hacienda y Crédito Público.

**ARTÍCULO CUARTO.-** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su ejecutoria y contra la misma no procede recurso alguno.

**NOTIFÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE**

Dada en Bogotá, D. C.



**JORGE ANDRÉS CARRILLO CARDOSO**  
Superintendente Delegado para Acueducto, Alcantarillado y Aseo

Proyectó: Ingrid Samantha Norato Vargas - Contratista Grupo de Certificaciones e Información  
Revisó: Nubia Stella Duarte Blanco - Contratista Grupo de Certificaciones e Información  
Aprobó: Giovanni Bonilla Rodríguez - Coordinador Grupo de Certificaciones e Información  
Visto Bueno: Martha Lucia Durán - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo  
Ángela López Villegas - Contratista Superintendencia Delegada para Acueducto, Alcantarillado y Aseo  
Expediente: 20094016886180972A